



Columna

¿Ajuste o abandono fiscal?



Sarita Jaramillo Arismendi
Consejera regional de Los Ríos

Bajo el rótulo de “Recomendaciones de Hacienda”, ha comenzado a circular un documento que propone la discontinuación de programas sociales estratégicos en Educación, Salud, Seguridad y Agricultura entre otros. Más que una revisión presupuestaria, estamos ante una redefinición del rol del Estado que golpea directamente el corazón de las familias más vulnerables. Esta noticia no puede, ni debe, dejarnos indiferentes.

La preocupación es crítica en la Salud Primaria (APS), administrada por municipios que representan el eslabón más cercano a la ciudadanía, especialmente en zonas rurales.

Para un habitante rural, estos programas no son cifras en una planilla; son su único acceso a la dignidad. Hablar de interrumpir los Cuidados Paliativos Universales, el Fondo de Farmacia para enfermos crónicos, la hospitalización domiciliaria o los pro-

gramas odontológicos integrales es, en la práctica, una sentencia de desprotección. Al recortar estos fondos, el Estado no está ahorrando; está abandonando a quienes juró proteger.

En Educación, el panorama es igual de desolador. Amenazar la continuidad del Programa PACE es cerrar la puerta a miles de jóvenes que ven en él la única vía para ser la primera generación de su familia en acceder a la educación superior.

Del mismo modo, cuestionar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) sin un rediseño que garantice lo básico es hipotecar el futuro: El 50% de las infancias vive inseguridad alimentaria, para muchos niños y niñas, esa es la única comida sólida del día.

La historia nos ha enseñado que la premisa de que, al aumentar los impuestos a las grandes empresas impulsa automáticamente el crecimiento es una falacia que solo profundiza la brecha de desigualdad.

Mientras modelos como el de Dinamarca o Suecia demuestran que una recaudación sólida es la base de la equidad y la estabilidad, aquí se opta por un camino que siembra incertidumbre social.

Como Consejera Regional, me preocupa profundamente esta lamentable situación, ya que las capacidades que tenemos como región de poder suplir estas áreas, son bien limitadas debido a la capacidad de nuestro presupuesto. Por eso, es imperativo que las regiones sean escuchadas antes de tomar decisiones tan radicales desde un escritorio centralizado.

Nuestro llamado al Gobierno es que el ajuste fiscal no puede ejecutarse a costa del bienestar social; las prioridades deben definirse desde el territorio y para las familias que hoy enfrentan las mayores dificultades. El presupuesto de una nación debe ser un reflejo de sus valores, no solo de sus saldos.